



Bogotá, veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022).

**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** LAUREANO MUÑOZ VÁSQUEZ

**DEMANDADOS:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP

**RADICACION:** 11001-33-35-010-2018-00392-00

1. Surtido el trámite del traslado de las excepciones propuestas, en los términos del parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, este Despacho entra a resolver la excepción previa formulada por la entidad demandada, de conformidad con la norma en cita y los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso de la siguiente manera:

Observado el escrito de contestación propuesto por la entidad demandada, encuentra el Juzgado que se propusieron varias excepciones<sup>1</sup>, de las cuales se destaca que una de ellas tiene la connotación de ser previa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del C.G.P., y es la correspondiente a la excepción de “*FALTA DE JURISDICCIÓN Y/O COMPETENCIA*”. Las demás excepciones no están dentro de las contempladas en el artículo 100 del C.G.P., y las razones expuestas en las mismas tocan el fondo del asunto.

2. Sobre la excepción previa de “*FALTA DE JURISDICCIÓN Y/O COMPETENCIA*”, el Juzgado advierte que fue sustentada en los siguientes términos:

*“Por tratarse de una pensión reconocida al demandante en calidad de trabajador oficial, se considera que corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral dirimir la presente controversia. Lo anterior además porque según los antecedentes del caso y las documentales obrantes en el expediente administrativo que se anexa como prueba:*

*Mediante Auto ADP No. 009227 del 16 de septiembre de 2014, la UGPP se refirió a las diferencias pensionales pagadas al demandante en virtud de la sentencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., lo que significa que el tema relacionado con su pensión ya había sido de conocimiento de dicha jurisdicción.”*

3. Al tramitarse el traslado de las excepciones propuestas, la parte demandante se pronunció sobre la excepción previa en cita, oponiéndose a su prosperidad, considerando que si bien es cierto la jurisdicción ordinaria es competente para conocer los temas relacionados con la seguridad social integral de conformidad con el artículo 2º numeral 4 del C.P. del T. y S.S., el trámite en curso “*(...) no se trata de un asunto relacionado de manera directa con la seguridad social- reconocimiento pensión de vejez, sino que su objeto tiene como finalidad obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que liquidó una deuda a cargo de mi representado en la suma de \$75.548.892*”.

Así mismo señala la parte actora, que los artículos 104 y 105 del CPACA señalan que

---

<sup>1</sup> La entidad demandada propuso como excepciones: falta de jurisdicción y/o competencia, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, compensación, prescripción y genérica.



la jurisdicción contencioso administrativa tiene competencia para conocer las controversias originadas en los actos administrativos en los que estén involucradas entidades públicas y dentro de las excepciones de su competencia, entre otras, se encuentra los temas relacionados con los conflictos de carácter laboral surgidos entre entidades públicas y trabajadores oficiales.

Finaliza considerando que la excepción previa no se configura, porque las pretensiones de la demanda tienen su origen en el cobro ilegal de unas sumas de dinero que recibió el actor de buena fe, mas no tiene el conflicto un origen de carácter laboral.

#### 4. Para resolver se **CONSIDERA**

El Despacho procede a pronunciarse sobre la excepción de falta de jurisdicción y/o competencia, aclarando que el artículo 100.1 del C.G.P., establece la misma como una de las excepciones previas que se pueden proponer.

El numeral 4 del artículo 104 del C.P.A.C.A., señala que la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo conoce de los procesos, “(...) *relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público*”. A su turno, el numeral 4 del artículo 105 del ejusdem dispone que esta jurisdicción **no conoce** de los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

Por su parte, el numeral 1º del artículo 2º, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece que la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de los conflictos jurídicos que se originen **directa o indirectamente** en el contrato de trabajo, además, el numeral 4º del mismo artículo, modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso señala que, dicha jurisdicción también conoce de “*las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos*”.

La normativa en cita desarrolla el principio del juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual “*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.* (...)”. Este principio del juez natural es aplicable, como todas las reglas del debido proceso, a todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, tal como lo dice la norma constitucional transcrita e integra uno de los factores de la competencia jurisdiccional.

En el caso objeto de estudio, a través de apoderado, el señor LAUREANO MUÑOZ VASQUEZ instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de las siguientes resoluciones:

- RDP 002312 de 24 de enero de 2018 “*Por la cual se modifica una mesada pensional por compartibilidad y se ordena el pago de un mayor valor del Sr. Muñoz Vásquez Laureano...*” (alegando falsa motivación de la misma),
- RDP 005811 de 14 de febrero de 2018 “*Por la cual se modifica la resolución No RDP 2312 del 24 de enero de 2018 del Sr. Muñoz Vásquez Laureano...*” (alegando falsa motivación del mismo),
- RDP 022036 de 15 de junio de 2018 “*Por la cual se determinan unos mayores valores recibidos, por concepto de compartibilidad pensional, con cargo a Recursos*



del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por conducto del Tesoro Público” (alegando cobro de lo no debido) y,

- RDP 032181 de 02 de agosto de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición elevado en contra de la Resolución RDP No. 022036 del 15 de junio de 2018 del Sr. Muñoz Vásquez Laureano...” (alegando confirmación de cobro de lo no debido).

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicita la condena de la UGPP a, **I)** Reconocer y pagar a favor del demandante, la mesada pensional conforme se le venía reconociendo por parte de la UGPP para el año 2018, en cuantía mensual de \$1.122.834,15, **II)** Devolver o restituir los valores descontados de las mesadas pensionales correspondientes a marzo a junio, mesada adicional del año 2018 y las que pudieren descontarse irregularmente en adelante, con sus correspondientes reajustes anuales, y **III)** Dejar sin efecto jurídico el cobro de la suma de \$75.548.892, a pagar por el demandante a favor de la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de mayores valores de mesadas recibidas.

Revisado el expediente, el Despacho advierte las siguientes pruebas relevantes para determinar si el asunto es o no de competencia de esta jurisdicción:

- I) Que el Instituto de Seguro Social mediante la Resolución Nro. 018296 de 2009 le reconoció pensión de vejez al actor a partir de 01/04/2009 en cuantía de \$496.900.
- II) Que mediante la Resolución Nro. 919 de 20 de abril de 2009, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, **con ocasión de la prestación de servicios del actor a la Caja Agraria y en cumplimiento a un fallo judicial, le reconoció pensión sanción de jubilación a partir del 15/03/2009 en cuantía de \$496.900.**
- III) Según la sentencia de 29 de febrero de 1996, emanada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso identificado con el número 20315, **el demandante prestó sus servicios para la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero entre el 16 de junio de 1980 y el 14 de abril de 1993, desempeñando como último cargo el de Bodeguero en el Departamento de Provisiones y Servicios, con un salario promedio mensual de \$292.372.**
- IV) Que la UGPP, respecto a la pensión sanción arriba mencionada mediante Resolución RDP 027325 de 08 de septiembre de 2014, modificó la Resolución 4259 de 25/10/2013 proferida por el Fondo Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia, que dispuso la indexación de la pensión. Seguidamente, la UGPP, mediante Resolución RDP 029179 de 24/09/2014, revocó el acto administrativo anterior y en su lugar dispuso ordenar el pago de las diferencias que resultaren entre la Resolución 919 de 20 de abril de 2009 y la inclusión en nómina de dicha resolución, indexadamente conforme al cumplimiento de un fallo judicial.
- V) Que la UGPP, considerando el reconocimiento de la pensión de vejez efectuado por el ISS (asumida luego por Colpensiones) sostiene que solo queda a cargo por pagarse, únicamente el mayor valor si lo hubiera, entre la pensión otorgada por Colpensiones y la que venía cancelando la entidad patronal a partir del 01 de abril de 2009. Desde entonces emitió los actos administrativos cuya nulidad se pretende (Resoluciones RDP 002312 de 24/01/2018, RDP 005811 de 14/02/2018, RDP 022036 de 15/06/2018 y RDP 032181 de 02/08/2018)

Conforme con lo anterior, el Juzgado encuentra que el demandante durante su vida laboral se vinculó con una sociedad anónima de economía mixta como lo es la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero<sup>2</sup>. Ello implica que, en los términos del parágrafo

<sup>2</sup> El artículo 1° del Decreto 1163 de 1996, prevé: “Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° de los estatutos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Nombre y naturaleza. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero es una sociedad anónima de economía mixta, del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario, vinculada al Ministerio de Agricultura. Es un organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y



del artículo 97 de la Ley 489 de 1998<sup>3</sup>, que dicha sociedad se encuentre sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, en tanto que su capital público estaba conformado en un porcentaje igual o superior al 90%. El demandante no ocupaba un cargo de dirección y confianza, pues del fallo traído a colación por el Juzgado se advierte con total claridad que ostentaba la condición de trabajador oficial al momento de su retiro de la entidad, razón por la cual el Juez Natural para resolver las controversias en materia de seguridad social es el Juez Ordinario Laboral.

No le asiste razón al apoderado de la parte actora cuando descurre el traslado de excepciones, indicando que el presente asunto no se relaciona de manera directa con la seguridad social, ya que al contrario, si se trata de un litigio derivado de esa temática, toda vez que el problema jurídico a resolver de decidirse de fondo esta actuación, tendría relación directa con establecer, si le asiste o no derecho al actor, a que se le reconozca la mesada pensional como la venía percibiendo por la UGPP, para lo cual es necesario dilucidar si son compatibles o no, la pensión de vejez hoy asumida por Colpensiones, y la pensión sanción hoy asumida por la UGPP que le habían sido reconocidas al demandante desde el año 2009.

Como quedó visto con anterioridad, la pensión reconocida por el Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia (luego asumida por la UGPP), fue otorgada en cumplimiento del fallo proferido el 29 de febrero de 1996 por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de cuyo contenido (Fols. 34- 40), se extrae con claridad que al señor LAUREANO MUÑOZ VASQUEZ le fue reconocida una pensión sanción, por haber prestado sus servicios durante más de 12 años, **como trabajador oficial** vinculado a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a través de un **contrato de trabajo**, por lo tanto, quien debe conocer del asunto es la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Laboral, como lo establece el numeral 1º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo. El Juzgado recalca que esta jurisdicción le está expresamente vedado conocer de los asuntos relacionados con esta clase de servidores, de conformidad con lo señalado en el citado el artículo 105, numeral 4º, de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, mediante declaración extra juicio allegada por la parte actora, que fuere rendida el 7 de diciembre de 2018 ante la Notaría Primera del Círculo de Bogotá (Fol. 85), el demandante manifestó que su último lugar de trabajo en el sector público fue en la Caja Agraria en la ciudad de Bogotá, en calidad de trabajador oficial.

También se debe tener en cuenta que la definición de situaciones jurídicas que recaigan sobre derechos pensionales, hace parte de los derechos a la Seguridad Social y la controversia en estudio se presenta entre el beneficiario del derecho a la pensiones sanción y de vejez, y una de las entidades administradoras (UGPP), luego entonces, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo citado inicialmente, en cualquier caso, dicho deberá ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral.

---

*patrimonio independiente. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero podrá utilizar la sigla Caja Agraria."*

<sup>3</sup> "ARTICULO 97. SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

(...)." "

PARAGRAFO. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado".



Por lo tanto, se procederá a declarar probada la excepción previa propuesta por la entidad demandada y se ordenará la remisión del expediente a quien legalmente tiene la competencia para conocer de esta clase de asuntos.

Por las razones expuestas, el Despacho resolverá que la excepción denominada “FALTA DE JURISDICCIÓN Y/O COMPETENCIA” propuesta por la demandada, tiene vocación de prosperidad y se ordenará la remisión del expediente a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bogotá (Reparto), para lo de su competencia.

En razón a lo anterior, este despacho,

### RESUELVE

- 1.- **Declarar probada** la excepción denominada “FALTA DE JURISDICCIÓN Y/O COMPETENCIA”, propuesta por la entidad demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
- 2.- Ejecutoriado el presente auto, **remítase** inmediatamente el expediente a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, para que proceda a enviarlo por reparto a la oficina de reparto para los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bogotá.
- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 9 del Decreto 806 de 2020, por secretaria, envíese correo electrónico a las partes, que informe de la publicación del estado en la página web.
- 4.- Por Secretaría dese cumplimiento a lo dispuesto en los numerales anteriores, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ**  
**JUEZ**

A.O.-

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz  
Juez Circuito  
Juzgado Administrativo



010  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab3446337c9d4e8174c35ea269dc29edca8f5c12d749ec685e793a1bf23cdbe2**  
Documento generado en 21/04/2022 12:41:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>